

## **Mentiras y pobreza**

### **José Luis Piñeyro**

#### **04 de marzo de 2006**

EL viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados contra el presidente Vicente Fox, por los anuncios sobre los programas sociales que el Ejecutivo federal estaba transmitiendo, hasta el hartazgo, por radio y televisión. Asimismo, la SCJN ordenó la suspensión provisional de dichos anuncios, hasta que no se resuelva el asunto.

Dos son los temas de fondo de esta controversia. Primero, el respeto a la ley, dado que México tiene un grave déficit respecto al cumplimiento de la legalidad, y aunque hoy los distintos actores dicen respetar el estado de derecho, al mismo tiempo violan las normas, a veces con singular alegría, como lo ejemplifica este caso. La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) fue aprobada a principios de 2004, y desde entonces el gobierno federal estaba obligado a poner una sencilla leyenda a toda la publicidad de los programas de desarrollo social: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Esta disposición pretende eliminar el tradicional uso electoral que se ha hecho de los programas sociales a lo largo de la historia de nuestro país; ayer, por el PRI, y hoy, por el PAN. Ejemplo inmejorable es el Programa Nacional de Solidaridad del ex presidente Carlos Salinas, que literalmente era una bolsa de dinero que se usaba de forma discrecional con fines políticos. La inclusión de la mencionada leyenda es una buena forma, barata además, de generar conciencia social para dejar muy claro que los programas sociales son para intentar hacer efectivos derechos sociales y no para promover la compra de votos, como lo establece la LGDS.

El segundo tema central de la controversia es la equidad entre los partidos durante la contienda electoral. Fox con sus promocionales estaba haciendo un proselitismo descarado a favor del candidato del PAN a la Presidencia, y como se encontraba en campaña electoral, no entendió la diferencia entre informar sobre obras sociales concretas y prometer ejecutarlas a futuro; además, pierde de vista que no puede poner a disposición de un partido el tiempo que en medios de comunicación corresponde al Estado para divulgar los avances en materia de obra pública o de los programas sociales. Por último, aunque ya se ha dicho mucho sobre el mensaje nada oculto bajo el lema: "Si seguimos por el mismo camino...", no se ha insistido en el talón de Aquiles de la publicidad foxista: difunde mentiras.

Ejemplo claro de las mentiras de Fox es la información transmitida sobre la llamada Pensión Oportunidades. Estos apoyos son un derivado del programa favorito de Fox: Oportunidades. Tal vertiente comenzó a operar, por absurdo que parezca, en enero de 2006 y, como es lógico, apenas se está instrumentando. A pesar de lo anterior, desde inicio de año, el Presidente con sus promocionales anunció a los cuatro vientos que "más de un millón de adultos mayores cuentan con su Pensión Oportunidades que mejora su calidad de vida". A finales de febrero todavía no se había entregado un solo apoyo, no había una sola persona recibiendo los 250 pesos mensuales que prometió el gobierno foxista. ¡Aunque usted no lo crea!

Según declaraciones recientes del coordinador de Oportunidades, Rogelio Gómez Hermosillo, ya se registró como beneficiarios a 300 mil adultos mayores y a partir de marzo comenzarán a entregarse apoyos. Quizá, el Presidente estaba residiendo en otro país, llamado Foxilandia.

Dentro de este contexto de excesos y mentiras del gobierno federal es que se entienden medidas tan extremas como las que está impulsando el Instituto Federal Electoral, al analizar los discursos del Presidente para asegurarse de que se ajustan a los criterios de neutralidad establecidos por este órgano electoral.

No podemos adelantarnos a la resolución definitiva de la SCJN sobre el tema, pero podemos asegurar que esta controversia está sentando un precedente legal y político importante. Es positivo observar cómo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, no tuvo otra salida más que aceptar, ante diputados durante su comparecencia del martes pasado, que había violado la ley, sin posibilidad de cubrirse bajo algún resquicio legal, sino reconocer que acatará lo que determine la SCJN.

Debemos aspirar a que los funcionarios y políticos, así como cualquier otro ciudadano, no esperen a ser descubiertos para respetar la ley, y esto comprende a todos los partidos. Fue patético que se tuviera que hacer pública la pretensión de la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martha Pérez Bejarano, de apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador "en sus tiempos libres", para que tuviera que renunciar.

No cabe duda que nos encontramos en un periodo de transición política sin un rumbo muy definido, pero las diferencias entre los poderes republicanos nos muestran que existen algunos contrapesos. Es lamentable que se llegue al uso de recursos tan extremos como la controversia constitucional para obligar al Poder Ejecutivo federal a acatar la ley mediante la intervención del Poder Judicial, pero esto es mejor que el pasado autoritario presidencialista donde los poderes Legislativo y Judicial eran más bien decorativos.

Respetar el estado de derecho es básico, pero también lo es respetar a la nación no diciendo mentiras y exageraciones sobre algo tan doloroso como es la inmensa pobreza en que sobrevive más de la mitad de nuestros compatriotas. Respetar la legalidad no basta para superar la miseria nacional; se requiere de acciones integrales que den legitimidad a las instituciones del Estado y al gobierno en turno, y eso no se logra con mentiras y parches, sino con una política de Estado de combate a la pobreza.

jlpineyro@aol.com

Profesor investigador de la UAM-A